

EXPRESA AGRAVIOS. RESERVA

JUZGADO DEL TRABAJO TRAMITE TERCERA NOMINACION

AUTOS: “SCAPOLATEMPO, Jorge Ricardo Adan c. DENABAR S.A. y otros s/ accidente de trabajo” (ordinario) expte. 1.201/10.

RAMON RICARDO RIVERO, abogado, por la parte
actora a V.S. digo:

Vengo a expresar agravios a fin de fundamentar el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de primera instancia de fecha 29/03/19, a efectos de que la Excma. Cámara del Trabajo a revoque en los puntos motivo de agravio, con costas para la contraria.

1.- Liberación de Denabar S.A.

La sentencia en la primera cuestión de su considerando punto 2.3. trata la demanda en contra de Denebar S.A. desestimándola para ésta empresa porque solamente estaría acreditado que la única participación es ser titular registral de inmueble sito en calle Catamarca 369/371, pero que “no se acreditó prestación de servicios en carácter dependiente” por lo que no son operativas las presunciones de forma (art. 58 CPL) y de fondo (art. 23 LCT). Dice además que el estatuto de la construcción excluye al propietario del inmueble.

La sentencia no es coherente consigo misma, ya que en el punto anterior había considerado acreditado que los servicios se prestaron en relación de dependencia. Una vez que la sentencia reconoció el carácter laboral de los servicios que prestó Scapolatempo en calle Catamarca 369/371 no puede luego disociarse para sostener lo contrario, so pena de nulidad por vicio en el razonamiento.

La sentencia parece sustentar que para que haya responsabilidad de la empresa propietaria debió probarse una relación directa entre ésta y el actor. De ser ello así, estaría realizando una interpretación equivocada del ordenamiento jurídico y además alterando la forma en que quedó trabada la Litis.

En efecto, la normativa jurídica prevé diversos supuestos donde se reconoce responsabilidad por obligaciones laborales a personas que no formaron parte directa del contrato de trabajo. Por ejemplo, en art. 29, 29bis, 30, 31 y 225 a 229 LCT.

Encontrándose reconocido en otro pasaje de la sentencia el carácter laboral de la prestación del actor ya no era pertinente la mención de la presunción contenida en el art. 23 LCT.

También, el fallo altera la traba de la Litis porque en demanda no se relató una relación directa, sino que expresamente se dijo (transcripción textual): “DENABAR S.A. encaró un negocio inmobiliario consistente en construcción de un edificio para obtener un lucro posterior, sin hacer cumplir las normativas de orden público que, en resguardo de la integridad física del trabajador, se encuentran vigentes”.

En autos se ha demostrado que Carlos Rolando Zossi fue el constructor que dirigió la obra de calle Catamarca 369/371. En su responde Zossi dice que por su carácter de ingeniero de la construcción celebró contrato para terminación de obra de Catamarca 371 en fecha 27/09/2008, luego prorrogado. En el instrumento por el cual Zossi justifica la contratación de sus servicios aparece como contratante un tercero, sin embargo, no aclara en qué carácter estaría encomendando la terminación de un edificio en un inmueble que no le pertenece. Lo que sí está claro es que el mayor valor que adquirió el inmueble por el trabajo constructivo del actor y sus compañeros quedó en beneficio del dueño. Y el único dueño conocido es Denabar S.A.

Los demandados se encargaron en no dar información al respecto y el trabajador, por su condición de operario raso, nunca tuvo acceso a la misma, constituyendo una prueba diabólica una exigencia en tal sentido.

La única interpretación posible es que ese tercero actuó en pos de los intereses de Denebar S.A., aunque no pueda demostrarse cómo fue autorizado o facultado. Nadie motivado por interés propio paga para que se construya en un inmueble ajeno. De allí que la única explicación lógica es que quien encomendó la construcción lo hizo en beneficio del propietario. El art. 30 LCT dice que cuando se encomienden servicios o trabajos en su establecimiento cualquiera se la forma o acto que le de origen es responsable solidario.

Por ello, era mucho más claro – y pertinente- decir que se acreditó que Denebar S.A. era el titular registral del establecimiento donde prestó servicios el actor, que afirmar, como lo hace la sentencia, que fue titular del inmueble sito en calle Catamarca 369/371 ya que, pese a que el dato es real, da una idea de neutralidad o ajenidad que distorsiona su relevancia para el caso.

El art. 2 de la ley 19587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo dice que establecimiento es el lugar donde se realizan las tareas. El art. 6 de LCT indica que el establecimiento es la unidad técnica o de ejecución destinada al logro de los fines de la empresa. Y el art. 6 LCT dice que empresa a la organización instrumental de bienes personales, materiales e inmateriales, ordenados bajo una dirección para el logro de fines económicos o benéficos.

Encontrándose probado que el actor trabajó y se accidentó trabajando en el edificio en construcción de calle Catamarca 369/371 debió consignar la sentencia que estaba acreditado que Denabar S.A era titular del inmueble donde funcionaba el establecimiento en el que prestó servicios Scapolatempo y por lo tanto considerar su responsabilidad.

Dice el fallo que también impide la condena a Denabar S.A. lo dispuesto en el art. 2 inc. b) del Estatuto de la Construcción ley 22.250 que excluye al propietario del inmueble que no siendo constructor repare o modifique su vivienda familiar. Al respecto cabe precisar que no está probado que Denabar S.A. no se dedique a la construcción, lo que procesalmente cargaba por su cuenta, pero además es evidente que tratándose de una sociedad comercial no resulta aplicable el concepto de “vivienda familiar”, ya que las personas jurídicas no viven ni tienen familia. El término sólo aplica para los seres humanos.

Además, lo construido es un edificio de varios pisos y varias unidades en cada piso, lo que no se corresponde con el concepto de vivienda familiar.

Al considerar en la tercera cuestión, punto 2.1.g), el fallo reconoce la responsabilidad de Zossi y la Cooperativa por la reparación de las lesiones sufridas por el actor, pero guarda silencio sobre la responsabilidad de Denabar S.A., incurriendo en una omisión de motivación.

No correspondía que Denabar S.A. sea eximido de responsabilidad por las indemnizaciones vinculadas al contrato de trabajo y las relaciones con el infortunio laboral, Esta empresa se benefició con el trabajo del actor. Scapolatempo contribuyó con sus tareas al avance de la construcción y con ello al aumento del valor del inmueble. De allí que sea responsable por el art. 30 LCT, como constructor informal por haber ejecutado obra de ingeniería o arquitectura previstas en ley 22.250 pero sin cumplir con exigencias formales, ya que delegó en Zossi, y este a su vez en la cooperativa, la contratación de trabajadores para que construyan un edificio en su inmueble, en total inobservancia de la normativa laboral, y especialmente la relativa a la higiene y seguridad de los trabajadores.

Dijo la jurisprudencia que la finalidad del inciso b) del artículo 2 de la ley 22250 es la de eximir de responsabilidad solidaria al propietario que emprende directamente la construcción, modificación o reparación de su propia vivienda familiar individual y no la de extender ese beneficio a aquellos casos (como el presente), donde no se trata de la propia vivienda, sino de la ampliación de un local comercial. (Conforme sentencia 48678, del 11 de diciembre de 1984, 'Albarracín, Eustaquio c/ Consorcio Horizonte y otros'). Autos **Ramírez, Aurelio y otro c/ Mirón Madeo, Luis Julio y otros s/ ley 22250**. Sentencia 16/05/1985. N° 49717. CNAT, SALA III, Guibourg, Vázquez Vialard. id SAIJ: fa85042261.

Por todo lo expuesto pido se revoque la sentencia en los puntos cuestionados.

2.- Liberación de Allianz Argentina Compañía de Seguros S.A.

En la cuarta cuestión del considerando la sentencia acoge la defensa de exclusión de cobertura de la aseguradora por no utilización de elementos de seguridad y por falta de comunicación del siniestro al asegurador.

Se esgrimió la exclusión de cobertura en base a la cláusula 18 de las condiciones generales de la póliza que dispone la comunicación al asegurador el acaecimiento del siniestro dentro de los tres días de conocerlo.

Ahora bien, la cláusula no indica que la comunicación deba ser fehaciente, ni modo en que ésta deba realizarse, por lo que, conforme a los términos contractuales, esa comunicación puede hacerse por cualquier medio, incluso con una llamada telefónica. Es un hecho de público conocimiento, y por lo tanto exento de prueba, que las aseguradoras admiten cualquier vía de comunicación. Es más, la propia Allianz lo promociona así en su página web.

Pero, no surge de los términos contractuales que la aseguradora deba otorgar constancia al asegurado o beneficiario de la denuncia realizada, pero cualquier denuncia debe obrar en los registros de la aseguradora.

Esto es relevante porque la citada en garantía en su planteo solamente se limita a transcribir el texto de la cláusula 18 y dice que de la compulsa de

los autos no surge la acreditación de los extremos allí previstos. Nada dice de lo que surge de sus propios registros. Tampoco afirma categóricamente que la cooperativa no haya denunciado el siniestro.

En la conceptualización de Couture lo pretendido por la aseguradora configura hecho extintivo de la pretensión, y por lo tanto su prueba está a cargo de quien lo invoca. Es decir, era la propia compañía de seguros la que debió acreditar el incumplimiento, pero además no puede pasarse por alto la cuestión de que en parte alguna afirmó que no haya recibido la denuncia del siniestro.

Si ello es así, debió concluirse que no se produjo la acreditación del supuesto para la caducidad del seguro.

Además, la relación entre la aseguradora y mi mandante, como beneficiario del seguro, debe entenderse como una relación de consumo – no contrato sino relación – en cuya virtud las estipulaciones preconcebidas por Allianz e impuestas a la cooperativa no le son oponibles al asegurado (art. 1 y siguientes de ley 24.240 modificado por ley 26.361). Cuando ocurrió el accidente la póliza se encontraba vigente y no puede afectar el derecho del beneficiario ha hipotética omisión de actos posteriores que no dependen de él.

Dice la jurisprudencia que la falta de denuncia del siniestro a la aseguradora es inoponible al tercero víctima. “Heckert Julio Zanareno c. Londra Silvia Raquel y otros s/ordinario. Expte.5629/c. sentencia 4.7.2017. Sala Civil y Comercial Gualeguaychú, Entre Ríos. En la web: <http://jurisprudencia.jusentrerios.gov.ar/tag/inoponibilidad-al-tercero-victima/>.

Sostiene también Allianz que no se cumplieron estándares de seguridad en el cumplimiento de las tareas del actor. Dice que el anexo A (cláusula 20/25) del contrato estipula que resulta excluida de la cobertura, las lesiones o accidentes que se produzcan sin haberse cumplido total o parcialmente con las normas de seguridad e higiene aplicables a las actividades de que se traten.

Si está acreditado que la aseguradora no ha negado la denuncia del siniestro expresamente, debe concluirse que ésta sí se produjo. Teniéndose por producida la denuncia, Allianz debió expedirse sobre su rechazo en el plazo de 30 días, conforme al art. 57 de ley 17418. Pero este rechazo no está acreditado en autos. Por lo tanto, aun cuando haya existido algún supuesto de exclusión, como ser el incumplimiento de medidas de seguridad, la aseguradora convalidó su responsabilidad.

Así lo entendió la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala C, fallo del 19/112/19 en autos Serdan Julio Gabriel c/Prado Ayma Michael Leandro y otro s/daños y perjuicios”. Microjuris, cita: MJ-JU-M-123350-AR | MJJ123350 | MJJ123350.

En efecto, si el asegurador se hallara liberado de pronunciarse adversamente con relación a los siniestros excluidos, el art. 56 de la Ley 17.418 carecería de función, en tanto cabe preguntarse qué sentido tendría pronunciarse sobre los incluidos, respecto de los que bastaría con guardar silencio (art. 56, in fine).

Por último, la valoración de la culpa del asegurado en los términos del art. 26 o del anexo del contrato, resulta ya improcedente porque el silencio

de la aseguradora en los términos del art. 56 de la ley de seguros, se lo impide, ya que se cualquier forma procede la cobertura.

A modo de conclusión cabe mencionar que la aseguradora operaba con un tipo de contratación que en este juicio ha sido declarada fraudulenta por violar el orden público laboral. En ese sentido, Allianz no puede ser considerada totalmente ajena a esta modalidad que recrea un sistema paralelo al sistema protectorio específico sobre riesgos de trabajo que prevé la legislación.

Por todo ello, solicito se revoque la sentencia en cuanto a la liberación de Allianz y se la condene por el monto asegurado, sin perjuicio de la responsabilidad de los demandados por la totalidad del daño.

Consecuentemente deberá revocarse la imposición de costas, y la regulación de honorarios. Hago reserva del caso federal y constitucional por encontrarse en pugna derechos protectorios del trabajador y del derecho de no ser dañado que tiene todo ciudadano.

Proveer de conformidad, será JUS TICA.



RAMON RICARDO RIVERO
ABOGADO – MAT. PROF 2536
C.S.J.N. T° 94 FOLIO 963
CUIT. 20-13.848.664-9- R. INSC